



Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, cuando eran conducidos a la prisión.

Corrupción e inundaciones

La nación andina fue estremecida por estos hechos

Por ARSENIO RODRÍGUEZ

ESTE 2017 ha sido un año donde el tema de la corrupción ha llenado y llena páginas de los diarios y espacios televisivos y radiales de todo el planeta. Y con razón, los nombres que aparecen en estos materiales periodísticos no son de vulgares delincuentes, sino de “personalidades” de la política y la alta sociedad. Un solo dato permite apreciar este hecho. Casi todos los expresidentes de las últimas cuatro décadas en Perú están presos o son prófugos e investigados, en su mayoría, por corrupción.

El último de los detenidos es el exmandatario Ollanta Humala encarcelado, al igual que su esposa, Nadine Heredia en prisión preventiva por 18 meses, medida tomada el 14 de julio, luego de una investigación de tres años realizada por el Ministerio Público, en espera de un juicio por el presunto delito de lavado de activos por recibir, encubrir y manejar discrecionalmente fondos externos supuestamente ilegales

para sus campañas electorales de 2006 y 2011.

En febrero del presente año, el director general de la institución Centrum Católica, Fernando D’Alessio, estimó durante una conferencia que el país se había perjudicado por unos 5 000 millones de dólares en los últimos cinco años por casos de corrupción, porque, dijo “ha incidido en su desarrollo, ya que se han desviado recursos que no han ido a los sectores de la Educación, la Salud ni la infraestructura. Esa plata se ha ido a los bolsillos de mucha gente”.

Anteriormente, los casos de corrupción que investiga la Justicia local aumentaron un 60 por ciento en los últimos tres años y los más relevantes están vinculados a empresas brasileñas como Odebrecht, precisó en 2015 la oficina de Walter Gutiérrez, Defensor del Pueblo para concluir que “creo que si hay algo eficiente en el Perú es la corrupción”. El funcionario agregó que

además es el mayor problema que afecta a los derechos humanos, porque “con los 3 600 millones de dólares que se pierden cada año en sobornos, se podría alimentar a 1.3 millones de personas que viven bajo la línea de pobreza en el país”.

En mayo de 2017 esa misma oficina actualizaba sus datos y en informe dado a conocer a la prensa, denunciaba que son más de 32 925 casos procesados por corrupción hasta el 1° de diciembre del pasado año. Entre los principales delitos enumerados en el documento, está el peculado y la malversación de fondos, entre otros, precisando que más del 50 por ciento de los alcaldes provinciales y distritales son investigados, aunque se logró dictar 1 284 sentencias con un 84 por ciento de condenas a los acusados.

Otro dato que permite considerar la dimensión del daño que provoca la corrupción en el país andino fue dado a principios de 2017 por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y Aduanas (Sunat), institución que ordenó el embargo de propiedades y cuentas bancarias por unos 25 millones de dólares de la constructora brasileña cuestionada, firma que reconoció el pago de millonarios sobornos en el país.

Las inundaciones que azotaron a la nación y el escándalo por corrupción provocará que el crecimiento económico de Perú se desacelerará este año en un tres por ciento, afirmó el ministro de Economía, Alfredo Thorne, aunque se mostró optimista en cuanto a una rápida recuperación. Optimismo aparte, la población es la que sufre, tanto por los embates de la naturaleza como por el inescrupuloso uso del erario público por parte de sus administradores oficiales.

Las manifestaciones de la población a lo largo y ancho del país demuestran su desencanto sobre quienes pensaron, en algún momento, que podrían ser dignos representantes de ocupar el sillón presidencial, pero que los escándalos han demostrado que son, sencillamente, unos corruptos. ●